

DEBATE

Nº 19
SUPLEMENTO
POLÍTICO
Domingo 31 de
diciembre de 2023



El pueblo en la calle en la Argentina de Milei

¿Cuánto tiempo estarán dispuestos los ciudadanos a asumir sacrificios hasta que se cumpla la incierta promesa de Milei y lleguen “tiempos mejores”?

Ahora
EL PUEBLO

DIRECTOR
Carlos Eduardo
Medina Vargas

COLABORADOR
Paulo Cuiza

**DISEÑO Y
DIAGRAMACIÓN**
Gabriel Omar
Mamani Condo

CORRECCIÓN
José María
Paredes Ruiz
María Luisa Quenallata

Redes Sociales



www.ahoraelpueblo.bo

La Paz-Bolivia
Calle Potosí, esquina
Ayacucho N° 1220.
Zona central, La Paz.
Teléfono: 2159313.

Los conceptos planteados en los artículos publicados en **Debate** no reflejan necesariamente la línea editorial de **Ahora El Pueblo**. Consideramos importante, sin embargo, que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral sobre un tema en particular.

El futuro de Brasil

EMIR SADER

PÁGINA 12

Desde Río de Janeiro

Fue un mejor año para nosotros en Brasil. Sin duda. En primer lugar, porque tuvimos el primer año de un nuevo gobierno de Lula, dejando atrás los años de Bolsonaro. Al dejar de ser elegible este último, Bolsonaro fue derrotado, aunque no necesariamente el bolsonarismo. La lucha ideológica y política para consolidar la democracia y hacer avanzar el antineoliberalismo continúa.

Este nuevo año permitió al Gobierno retomar la prioridad de las políticas sociales, rescatando programas tradicionales, comenzando con Bolsa Familia, seguido de otros y sumando nuevos programas para atacar la situación de desigualdad que sigue teniendo Brasil.

Porque no se abordó el problema económico central del país: el capital especulativo sigue siendo el eje fundamental de la economía de Brasil. Los bancos privados expresan esta hegemonía. La especulación financiera y las altas tasas de interés continúan dominando la economía de Brasil.

Es cierto que el desempleo ha disminuido, que la desigualdad ha disminuido, que la exclusión social es menor. Pero nada de esto llega a las calles. Las escenas callejeras generalizadas en todo el país siguen siendo las de personas abandonadas, durmiendo en las calles, familias enteras ocupando las veredas. Siempre nos preguntamos, cuando los vemos: cuándo y mediante qué mecanismos llegará el rescate de estas personas.

Lula siempre dijo que gobernar es cuidar de la gente. Estos cientos de miles de personas no tienen a nadie que los cuide. Como si los gobiernos no llegaran a ellos.

Nuestra mayor esperanza es que estas escenas dejen de ocupar nuestras calles y plazas. Que ya no haya personas que no sean atendidas.

Brasil mejoró en 2023 porque volvemos a tener un gobierno nacional democrático que habla, por Lula, por todos los brasileños. Que una vez más soy respetado en el mundo. Que tiene un presidente prestigioso, que es responsable de pacificar los conflictos bélicos en todo el mundo.

Brasil ha vuelto a una senda positiva. Tiene democracia, tiene como prioridades las políticas sociales, tiene atención a los más desfavorecidos. Mira a los países vecinos con atención y preocupación por ayudarlos.

Todavía no sabemos cómo será 2024. Existe una gran posibilidad de que Donald Trump –si puede ser candidato– vuelva a ser presidente de Estados Unidos, con posiciones extrañas, agresivas y aislacionistas hacia Estados Unidos.

Sabemos que es poco probable que las heridas que más nos duelen hoy –Palestina y Argentina– cambien. Los niños palestinos seguirán siendo las víctimas más crueles de la guerra en el mundo. Mientras Brasil sale de su peor momento, Argentina apenas comienza a entrar.

2023 fue un mejor año para nosotros, en gran parte gracias a la presidencia de Lula. Si Lula se postula para la reelección –como ya lo mencionó–, podríamos tener un período político muy especial: otros siete años de Brasil con Lula. Habrá que aprovechar esta circunstancia histórica especial, con un proyecto estratégico que aproveche estas condiciones para poner en práctica un proyecto de transformaciones profundas en el país, que haga de este período un período histórico, único e irreversible.



DEBATE



Matar a un pueblo

GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS

LA JORNADA

Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial no se había presentado un caso de genocidio, término de origen griego que literalmente significa “matar un pueblo”, tan planetariamente exhibido en tiempo real por heroicos periodistas palestinos y no palestinos, y a pesar de la censura de los grandes medios de comunicación y los controles estrictos de las redes sociales, tan exhaustivamente comprobado por numerosas organizaciones de derechos humanos; tan unánimemente condenado por millones de personas que con horror son testigos diarios de la masacre indiscriminada y selectiva, de los ataques a hospitales, convoyes, refugios, campos de desplazados, escuelas, casas, templos y a toda la infraestructura urbana y de servicios, que el gobierno sionista de Israel lleva a cabo contra la población palestina en Gaza y en todos los territorios ocupados.

¿Qué hacer? ¿Cómo detener este holocausto? ¿Cómo vivir la propia cotidianidad mientras la cifra de muertos y heridos, incluyendo miles de infantes y mujeres, crece en cada bombardeo, en cada acción punitiva, en cada medida represiva? ¿De qué sirven la Organización de Naciones Unidas y toda su estructura de defensa de los derechos humanos si no pueden detener estos crímenes de guerra contra la humanidad, cometidos por un Estado abiertamente terrorista, con la complicidad de los gobiernos de Estados Unidos, sus aliados europeos y los que en el mundo entero permanecen en un ominoso silencio?

¿Cómo no sentirse interpelados cuando nos enteramos de tantos periodistas asesinados en tan poco tiempo? Al 13 de diciembre de 2023, ya son 89 muertos en Gaza, según Al Jazeera. Varios miembros de la familia del jefe de esta cadena de noticias, Wael Al-Dahdouh, su esposa, su hijo adolescente, su hija pequeña y su nieto murieron por el ataque de Israel a un campo de refugiados en el centro de Gaza, llamado Nuseirat. El presidente de Reporteros sin Fronteras declaró: “nunca se ha visto una matanza de periodistas como la vista en Gaza. Todos son asesinatos, crímenes de guerra y, como tal, las hemos puesto en conocimiento del Tribunal Penal Internacional”. Estas masacres de población civil, desarmada y no combatiente no son los daños colaterales de una guerra, se trata de bajas previamente seleccionadas, monitoreadas y coordinadas por los servicios de inteli-

gencia militar para infligir terror extremo y castigo, con el propósito de erradicar a un pueblo, cortar sus raíces, esto es, genocidio en toda la extensión del concepto, que la propia ONU ha definido en numerosas declaraciones, normativas, articulados, que constituyen letra muerta a la hora de cubrir la impunidad de los terrorismos de Estado.

Acorde con Amnistía Internacional, el bombardeo a Gaza está causando un sufrimiento inimaginable a quienes ya se enfrentan a una grave crisis humanitaria. “después de 16 años sometida al bloqueo ilegal de Israel, Gaza tiene su sistema de atención de la salud prácticamente en ruinas y la economía por los suelos. Los hospitales se colapsan, incapaces de atender al escalofriante número de personas heridas, y sufren graves carencias de medicamentos y equipos vitales”. Amnistía Internacional ha instado a la comunidad internacional a pedir a Israel que ponga fin a este asedio total que impide a la población de Gaza el acceso a alimentación, agua, electricidad y combustible, y que permita urgentemente que llegue ayuda humanitaria a Gaza. Asimismo, debe presionar a Israel para que levante el largo bloqueo impuesto a Gaza, que constituye un castigo colectivo a su población civil, un crimen de guerra y una pieza fundamental del sistema de apartheid israelí. Por último, las autoridades israelíes deben rescindir su orden de “evacuación”, que podría equivaler a desplazamiento forzado de la población.

¿Cuántos más niños de Palestina deben morir para que las sacrosantas academias de las prestigias universidades estadounidenses y europeas, y sus contrapartes extractivistas en América Latina, condenen a sus gobiernos por complicidad en la matanza de un pueblo, por avalar la impunidad del Estado sionista de Israel? ¿Seguirán nuestros colegas de la Minerva Initiative sufragando investigaciones sobre las amenazas del terrorismo para las democracias del “mundo libre”, ignorando y satanizando los análisis centrados en las expresiones más letales para los pueblos y la humanidad en su conjunto, que constituyen los terrorismos de Estado?

Es urgente demandar el cese del fuego en Gaza y los territorios ocupados, la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos palestinos, la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado sionista de Israel. Es perentorio exigir que todos los responsables de los crímenes de guerra y lesa humanidad sean llevados ante la justicia internacional para ser juzgados y castigados. La humanidad no puede tolerar otro genocidio. Millones de personas en el mundo entero claman por el fin de la ocupación colonial de Israel sobre Palestina.

La Argentina de Milei: el

GÜNTHER MAIHOLD

DW

Con un acto que algunos consideran de gran audacia política, el presidente argentino, Javier Milei, ha iniciado su gestión presidencial: un decreto dictado con afán refundacional y a través del cual desea dar un golpe de timón a esa Argentina que desde hace tiempo persiste en una crisis inflacionaria, en un déficit público, en un endeudamiento masivo y sin capacidad de encontrar un camino hacia las reformas indispensables para salir de la polícrisis interna sin fin.

Siguiendo una lógica del “vamos por todo”, Milei ha optado por acelerar la conflictividad del país con un megapaquete de 300 reformas de carácter legal usando el mecanismo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que pretende, con base en un impulso de desregulación, reconducir al país hacia un derrotero sin inflación ni subsidios estatales, y la liberación de las fuerzas del mercado. Son justamente estas fuerzas las que deberán garantizar el avance económico después de unos tiempos duros y situaciones límite que anunció a la ciudadanía.

DESREGULACIÓN RADICAL

El interés central por terminar con el déficit fiscal no afectará solamente los ingresos de los trabajadores a raíz de aumentos impositivos, sino también las posibilidades de generar condiciones de mayor productividad

en las empresas estatales a través de su privatización. Sin embargo, los inversionistas no solamente esperan mayores ganancias. También requieren confianza en que los cambios anunciados realmente tengan estabilidad y no sean revocados por las instancias parlamentarias.

La reacción de los sindicatos como la CGT no se hizo esperar; mucha gente, por resistencia o miedo, participa en las movilizaciones contra una política que ve como amenaza a los logros alcanzados y las posibilidades del futuro personal. Milei ataca con sus medidas anunciadas un poder central del sistema peronista, a los mismos sindicatos y su capacidad establecida de poder imponer su voluntad a los presidentes en turno o influir en los mismos para que no puedan avanzar en contra de los intereses propios de la organización, en muchos casos a costa de la sociedad entera y un sistema de corrupción ampliamente distribuido por el país.

Las modificaciones anunciadas en el régimen de las obras sociales y los futuros impedimentos para recaudar la cuota sindical van apuntando directamente al corazón de las centrales sindicales, ya que atacan las bases de su fuerza como actor central de la sociedad argentina, especialmente cuando se decretan restricciones al derecho a la huelga. Suenan las campanas de una huelga general si desde el punto de vista sindical no se logra frenar el decreto en los tribunales o en las instancias parlamentarias.

La contundencia del impulso político de Milei puede haber sorprendido a los sindicatos, pero por igual a los mismos electores del Presidente, que esperaban unas reformas profundas, pero con la negociación de consensos parciales en un sistema que a sus ojos había demostrado ser inviable para el futuro y hasta en el presente, con una carga de problemas irresueltos y



pueblo en la calle



postergados ante una crisis fiscal e inflacionaria sin solución a la vista.

Da la impresión de que se está abriendo un escenario en el cual la disputa la decidirá quien logre conquistar el control de la calle, por lo cual el propio Presidente avanzó más en esta dirección con un protocolo antipiquetes publicado por su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La misma visita del Presidente al cuartel de la Policía para seguir el operativo de control en las calles por medio de los militares es un claro indicio que será allí donde se va a decidir el avance o el fracaso de este intento de reforma intempestiva en la Argentina que, según el nuevo Gobierno, estará cortando el nudo gordiano que impide el desarrollo del país.

LEGITIMIDAD ELECTORAL VS. LEGITIMACIÓN SOCIAL

Sin embargo, lo que para algunos parece ser audacia presidencial puede convertirse rápidamente en prueba de la incapacidad de comprensión del Presidente ante el hecho de que la política también implica saber administrar conflictos. Tal enseñanza está muy presente en este país, en el cual muchos gobernantes tuvieron que aprender que la legitimidad de origen del éxito electoral puede diluirse rápidamente ante movilizaciones ciudadanas y cacerolazos masivos que generan una legitimación social para activistas quienes rápidamente logran que el pueblo en la calle decida sobre la suerte del gobierno en turno. De esto pueden hablar Fernando de la Rúa (1999-2001) y el propio Mauricio Macri (2015-2019), quienes fracasaron en

el intento por implementar medidas que encontraron un amplio rechazo en las calles de Buenos Aires y otras capitales provinciales.

Cuando las clases medias deciden apoyar las manifestaciones en la calle, rápidamente pueden desmoronarse alianzas políticas y caerse en pedazos los paquetes de rescate. A final de cuentas la pregunta central es: ¿Cuánto tiempo estarán dispuestos los ciudadanos a asumir sacrificios hasta que se cumpla la incierta promesa de Milei y lleguen “tiempos mejores”?

El público que Milei acostumbra a llamar los “argentinos de bien” ciertamente está fastidiado de los tantos años de kirchnerismo en sus diferentes variantes, donde nunca se logró resolver los problemas que los diferentes regímenes peronistas habían creado; sin embargo, este público no tiene una identidad fija que haya sido articulada políticamente por parte de Milei. Más bien es una colectividad que puede disolverse rápidamente en cuanto se genere la sensación de que el nuevo gobierno no resuelve las cosas sino más bien se enreda en múltiples conflictos a la vez.

Una interrogante que solamente se resolverá con el tiempo es si aparecerá un “Milei negociador” que deje a un lado la motosierra, logre superar su propia imagen de destructor y asuma un papel constructivo para no fomentar más las discordias en la sociedad y las divisiones sociales. Tanto las instituciones como “el pueblo en la calle” son indispensables para que se pueda encontrar el camino hacia un futuro común de los argentinos.



El fin de un ciclo histórico en Chile

ANDRÉS KOGAN VALDERRAMA **REBELIÓN**

Pasó lo que era esperable en Chile, por segunda vez consecutiva se rechazó una propuesta constitucional, lo que no solo es algo bastante inédito a nivel mundial, sino que es el cierre de un proceso que pretendía dar una salida democrática e institucional a una crisis del sistema político y económico imperante, que derivó en octubre de 2019 en una enorme revuelta social.

Si bien el resultado puede verse positivo y como un alivio, ya que desprestigia y frena el ascenso de la ultraderecha y de la figura de José Antonio Kast, nos deja en un escenario de gran frustración y decepción a nivel político, que nos obliga a preguntarnos nuevamente por las razones del fracaso del proceso constituyente, iniciado institucionalmente el 15 de noviembre de 2019, a través del llamado Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución.

Es así como aquel acuerdo, que fue la respuesta de la clase política a las enormes movilizaciones y demandas de muchos sectores, dio el punto de inicio de un proceso político como nunca antes había existido en Chile y que nos llenaba de esperanza de que por fin tendríamos una Constitución democrática, que garantizara derechos universales y fuera capaz de incluir al país en toda su pluralidad.

A nivel personal, soy de los que vio con cierta desconfianza ese acuerdo de 2019, al no incorporar en la discusión a distintos sectores sociales y no sentar las bases para una Asamblea Constitu-

yente, pero lo terminé viendo como una inmensa oportunidad de construir un país distinto, que se hiciera cargo de una historia política elitizada y autoritaria, en donde las constituciones fueron hechas a la medida de quienes controlan el poder político y económico, desde 1833 en adelante.

Por lo mismo, la inmensa victoria del plebiscito de entrada del 2020 y la conformación de la Convención Constitucional el año 2021, compuesta por una enorme cantidad y diversidad de personas por fuera de partidos políticos, generaría un órgano ciudadano y que se parecía mucho más a Chile, lo que hacía que por fin tendríamos una democratización de la democracia y el comienzo de una nueva época en el país.

No obstante, la composición de la Convención Constitucional dejó a la derecha tradicional muy disminuida y sin capacidad de veto de las normas, haciendo que este sector se uniera a la ultraderecha y comenzara con una inmensa campaña comunicacional desde el primer momento, tanto en los medios tradicionales concentrados como a nivel digital, para denostar el trabajo de las y los constituyentes a través de mentiras, desinformación e instalando la idea de que la nueva propuesta era un mamarracho.

De ahí que las distintas demandas y artículos que se fueron aprobando en la Convención Constitucional fueron sistemáticamente cuestionados y ridiculizados fácilmente, como pasó con la Plurinacionalidad, la Democracia Sustantiva, los Derechos de la Naturaleza, el Estado Regional y los distintos Derechos Sociales (educación, salud, vivienda trabajo, seguridad social), a través de ideas apocalíp-



ticas como que Chile se iba a desintegrar territorialmente, o que se instalaría un gobierno totalitario luego de aprobarse.

Lo que vino después de eso fue una catastrófica derrota el 4 de septiembre del 2022, y luego un nuevo acuerdo entre los partidos políticos por una nueva Constitución, solo que esta vez fue mucho más excluyente, y desesperado por salvar algo sin ninguna base, lo que terminó por darle el triunfo a la ultraderecha y al Partido Republicano en el nuevo Consejo Constitucional, escribiendo una Constitución hecha a la medida de ellos, rechazada finalmente el domingo pasado.

Dicho todo esto, no podemos volver al fracaso de 2022 y hacernos los desentendidos con nuestra propia responsabilidad política en este fin de ciclo histórico en Chile, el cual habrá tenido una brutal maquinaria antidemocrática detrás desde la derecha tradicional y de la ultraderecha, pero también se explica desde nuestros propios errores y lo realizado por nosotros mismos durante todo ese período.

Cuando planteo responsabilidad política, no me refiero a lo que señalan ciertos sectores de izquierda, que plantean que el problema del rechazo de 2022 pasó por redactar una Constitución muy extrema e identitaria, o desde una mirada unidireccional de la sociedad, como dice el exministro Francisco Vidal, sino justamente por nuestra propia incapacidad de sostener un proceso de manera firme y con consistencia.

Partiendo por el gobierno de Gabriel Boric, me parece que no vio que la mejor forma de acompañar el primer proceso constituyente era impulsando fuertes políticas económicas universales y de entrega directa de recursos a las familias, que le diera certezas a las personas ante los efectos desastrosos de la pandemia para muchas y muchos, que vieron este proceso como algo muy lejano y desconectado con sus necesidades más básicas.

En otras palabras, el Gobierno mantuvo las políticas económicas, en el marco de una responsabilidad fiscal, lo que en otro contexto se podría entender, pero no en un escenario constituyente, como pasó con su negativa a un nuevo retiro de dinero en las AFP, lo que generó una distancia cada vez mayor de la población y un mayor malestar.

El Gobierno tampoco vio la importancia del rol de los medios de información en este período, no poniendo en el centro la discusión

sobre una desconcentración de estos y la necesidad de fortalecer los canales públicos, como TVN por ejemplo, para disputar la agenda e instalar un relato amplio.

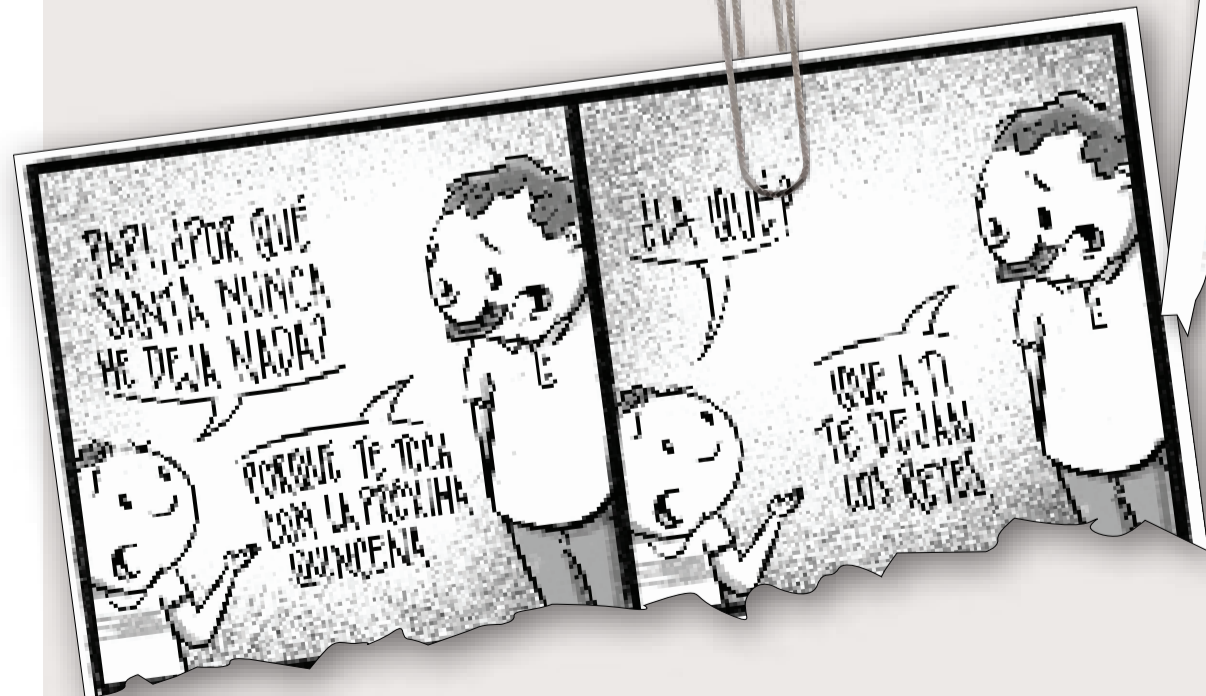
En cuanto a la responsabilidad de la Convención Constitucional, pecó de un triunfalismo exacerbado y totalmente encapsulado, al ver cómo varios de sus integrantes no le tomaron el peso del momento histórico que estábamos viviendo como país, involucrándose en distintas polémicas innecesarias, en donde si bien el caso de Rodrigo Rojas Vade fue el más emblemático y grave de todos, se cometieron muchas estupideces por exceso de confianza.

Sobre los partidos políticos de izquierda, no fueron capaces de conducir y liderar el proceso de manera coherente y disciplinada, quedando en evidencia al extremo cuando firmaron una declaración que buscaba reformar la nueva Constitución, en el caso de aprobarse, lo que no hizo otra cosa que quitarle piso a su contenido, planteando una mirada más “moderada” y “centrista”, cediendo así al discurso de la derecha de que era un mal texto.

Por otro lado, los movimientos sociales cayeron en lógicas anti-partidos, lo que se vio reflejado en la campaña y la franja televisiva, como también en ciertas funas y cancelaciones a quienes no coincidían con ciertas demandas, careciendo de un comportamiento estratégico y de diálogo, que no podía caer en purismos en un momento tan trascendente para Chile, que necesitaba la completa articulación entre todas las fuerzas transformadoras.

Por último, muchos y muchas que estuvimos en campaña en las calles de manera entusiasta, no le tomamos el peso a tiempo a todo lo anterior, al pensar erróneamente de una inmensa politización de la sociedad chilena, la que se vino abajo con el voto obligatorio, lo que nos mostró una subjetividad neoliberal, racista y machista, que pensamos ingenuamente y acriticamente que iba en retirada.

En definitiva, no estuvimos a la altura de este momento histórico en Chile, el cual se cierra para nuestro pesar y mantiene el orden imperante para que las fuerzas conservadoras sigan imponiendo su dominio en el país, lo que será recordado en el futuro como el período constituyente que no pudo ser.



Caricatura global